

La presente resolución en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto, es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se extiende la siguiente versión pública:

37-SI-2016

OFICIALÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las nueve horas y cinco minutos del trece de octubre de dos mil dieciséis.

El presente procedimiento inició el veintinueve de septiembre del presente año, por medio de solicitud de información presentada por [REDACTED], [REDACTED], por medio de su Apoderado General Judicial [REDACTED]

Considerandos:

I. Relación de los hechos.

[REDACTED], por medio de su apoderado [REDACTED], solicitó copia íntegra de los expedientes DM 141-16, 116-A-15, 115-A-15, DM-36-16, 22-O-16, DM-129-2016 y de cualquier denuncia, aviso o procedimiento oficioso iniciado en este tribunal en su contra.

Se determinó que, por su naturaleza, la información solicitada debe ser administrada por la Unidad de Ética Legal de este tribunal, por lo cual, le fue requerida mediante memorando N° 43-OAIP-2016 de fecha cuatro de octubre del año en curso.

La unidad requerida trasladó la información solicitada por [REDACTED] y, en lo que respecta a los procedimientos DM 141-16, DM-36-16 y DM-129-2016, manifestó no contar con dichas referencias,

II. Fundamentos de Derecho.

El artículo 6 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresar y difusión del pensamiento, siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Por otra parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señalan que el acceso a la información es una herramienta eficaz para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción; por lo cual es obligación del Estado garantizar su libre y democrático ejercicio.

En el marco de la competencia subjetiva, los artículos 50 y 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP–, otorgan a esta Oficialía las potestades requeridas en el tratamiento de las solicitudes de información.

Además, los artículos 36 y 66 de la LAIP, 50, 52, 54 y 55 de su Reglamento indican los requisitos que debe contener la solicitud de información, así como el análisis de admisibilidad que se hará sobre la misma, debiendo en todo caso fundar y motivar la decisión adoptada a fin de evidenciar la certeza de lo afirmado - *Ratio iuris*-.

Según acuerdo N° 110-TEG-2016 de fecha trece de abril del corriente, el tribunal de Ética Gubernamental, en base a lo dispuesto en los artículo 19 letras f) y g) y 24 de la LAIP, declaró reservada de forma total y por cuatro años (contado a partir del inicio de cada causa) la información contenida en los procedimientos administrativos sancionadores que estén en vías de investigación, incluyendo los escritos de los intervinientes e informes de autoridades públicas, así como los anexos de los mismos.

En el caso particular, luego de verificada la clasificación de la solicitud del [REDACTED] por medio de su apoderado el licenciado Cárcamo Velásquez, el análisis de la misma revela que ha cumplido los requisitos de admisión y que su contenido no está sujeto a reserva o confidencialidad (por tratarse de parte activa en los procedimientos).

Por tanto, con base en los artículos 1 y 6 de la Constitución, III de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 13.1 de la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Corrupción, 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 19 letras f) y g), 20, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 50, 62, 65, 66, 70, 71, 72 de la LAIP, 40, 50, 54 y 55 de su Reglamento, la Oficialía de Acceso a la Información Pública del Tribunal de ética Gubernamental, **RESUELVE:**

a) *Autorízase* la intervención del Abogado [REDACTED] en su calidad de Apoderado General Judicial del [REDACTED], [REDACTED]

b) En vista de que la solicitud del [REDACTED] cumple los requisitos de admisibilidad, y proporcionada que ha sido la información por la respectiva unidad de este tribunal, *entréguese* tal información al solicitante y, en lo que respecta a los expedientes DM 141-16, DM-36-16 y DM-129-2016 *hágase* saber que este tribunal no tramita ningún procedimiento con dichas referencias. .

Notifíquese.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

Lic. Wilber Alberto Colorado Servellón
Oficial de Información
Tribunal de Ética Gubernamental

